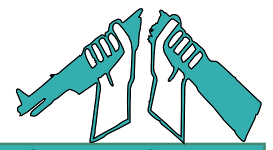
No 102, Abril del 2015

El fusil roto

Boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra



Militarismo de Estado: militarización más allá de las Fuerzas Armadas

En la oficina, las alertas diarias de los medios nos envían noticias sobre objetores de conciencia, niños soldados, activistas de paz y acciones directas no violentas alrededor del mundo. Un día, fue noticia que en Birmingham – la segunda ciudad más grande de Inglaterra – soldados de la "Policía Militar Real" (también llamados boinas rojas) estaban "manteniendo la seguridad en las discotecas" del centro de la ciudad. Esto significa, arrestar a soldados en sus salidas de noche y dar "arresto ciudadano" a civiles que ellos pensaban que estaban violando la ley.

El artículo de la policía de West Midlands terminaba así: "Estos se suman a la diversidad de la zona y a la gente les encanta ver a nuestras tropas. Igual que la canción "All nice girls love a sailor" (Todas las chicas guapas aman a un marinero), en este caso ¡todas las chicas guapas aman a un boina roja!". Nos preguntamos si una acción directa de arrestar estos "boinas rojas", los cuáles arrestan ciudadanos, sería una noche divertida...

Quizás inevitablemente, muchos de los artículos en esta edición son sobre militarización policial. Ya sea en el sur de África (artículos de Laura Pollecut), Gran Bretaña (artículos de Betsy Barkas), Turquía (escritos por un nuevo miembro de WRI´s, Semih Sapmaz) o Estados Unidos (piezas de la liga de resistentes a la guerra Ali Issa and Tara Tabassi), las fuerzas policiales son una forma de control social. Se prestan a ser arrastrados a lo largo de un espectro de violencia y militarización hacia una brutalidad más visible e inmediata, basándose normalmente en sentirse privilegiados de amenazar a otros con su poder. El punto fuerte de las Fuerzas policiales es la coacción (ya sea mediante violencia directa, contención o amenaza de castigo): para mantener a la gente a raya, para bien o para mal.

Otros artículos en esta edición del Fusil roto muestran la militarización infiltrada en las funciones de Estado mucho más allá de las Fuerzas Armadas o la policía: tenemos a Cesar Padilla en la militarización de la industria extractiva de América Latina, Prasanna Ratnayake en la militarización en Sri Lanka durante los últimos diez años, y Maren Matovani (de "Stop the Wall") y Henrique Sanchez (de MOPAT- Movimiento Palestina para Tod@s) en los servicios de "seguridad" proporcionados por las compañías israelitas en todo el mundo. Frances Guy comparte experiencias de su trabajo en Irak después de la invasión del 2003, centrándose en las relaciones entre el reparto de asistencia humanitaria (a menudo creado militarmente) después de las crisis y "seguridad" y "defensa".

No se puede poner control a la lógica en la que el militarismo se basa – control mediante la violencia, uniformidad jerárquica, el racismo, patriarcado y nacionalismo que lo hace posible, así como – por supuesto - dependencia de las armas. Esto se extiende al sistema educativo, arquitectura y espacios públicos, cultura y entretenimiento, cuidados de la salud (en definitiva a todo), tal y como esta colección de artículos demuestran. Y por supuesto que "mantener el control "del militarismo no es en absoluto el objetivo. La mentira de que la existencia de las Fuerzas Armadas nos protege y nos previene de tener que tomar las armas por nosotros mismos (básicamente limitando el militarismo, confinándolo a un pequeño "grupo de hermanos", para que el resto podamos ocuparnos de nuestros asuntos no militarizados) es igualmente generalizado y ridículo.

En los medios sociales, tratamos de destacar estos casos de militarismo en todo el mundo usando #EverydayMilitarism. Ver algo como cotidiano nos impide percibirlo o rechazarlo. Como pez en el agua, no se siente el peso. Con nuestro trabajo sobre la militarización juvenil estamos cortando las formas de exponer a la gente joven al militarismo desde muy temprano, y haciendo por evitar esto. Visita aquí nuestra página web para conocer más.

Hannah Brock



Foto: Activistas retan el entrenamiento 'Urban Shield' de la policia. Artículo completo en página 6. Credito a Ramsey ElQare de www.elqarephotography.com"

Nuestra policía está militarizada y eso necesita ser tratado

Laura Pollecutt

En los años del apartheid, se desarrollaron debates dentro y fuera del país sobre cómo funcionarían las instituciones estatales de seguridad en un estado democrático postapartheid. Estos debates se intensificaron en los últimos años de dicho régimen.

Existía poca diferencia entre el ejército y la policía del apartheid, ya que se usaba a ambas fuerzas para que mantengan al gobierno minoritario en el poder mediante medios de represión. De hecho, estas dos instituciones, con frecuencia, competían por ver quién serviría mejor a las autoridades del Partido Nacional. La policía tenía poderes de amplio alcance y contaba con un vasto armamento para sofocar la "agitación".

Luego del año 1994, fue importante asegurar que se realizaran cambios en la fuerza policial y que ésta pudiera realizar sus deberes de manera que brindara un servicio a los ciudadanos. En consecuencia, el nombre de Policía Sudafricana (fuerza) pasó a ser Servicio de la Policía Sudafricana para resaltar el cambio de actitud que se requería. Además, se introdujeron nuevas estructuras jerárquicas dentro la fuerza policial para desmilitarizar a la misma.

Los niveles de delito en Sudáfrica son altos. En consecuencia, los ministros del gabinete policial y los comisarios postapartheid han complacido las demandas de más de lo que el gobierno apartheid habría llamado "Kragdadigheid"1 (que significa fortaleza, puño de hierro) en lo que concierne al delito. El lenguaje era y aún es "el lenguaje de guerra". La jerarquía policial propone más agresión en la persecución y el arresto de los criminales y habla de manera constante sobre "la guerra contra el delito". A pesar de ser un acto ilegal, se impulsa a los oficiales a que "disparen para matar". Aquellos que creen que la policía debe ejercer el rol de juez y ejecutor prefieren asegurar que los delincuentes tienen más derechos que los ciudadanos comunes.

Los partidarios de la desmilitarización se opusieron a la remilitarización de los servicios policiales propuesta de manera regular por los políticos y se manifestaron particularmente cuando se conoció que las movilizaciones estaban en marcha para volver a introducir cargos militares. A pesar de esta oposición, los mismos se reintrodujeron en 2010 en los cargos que existían bajo el régimen apartheid. El cambio no fue popular, ni siquiera dentro de los servicios policiales.

En 2011, el Sindicato de Derechos Civiles de Empleados Policiales y Penitenciarios (POPCRU, Police and Prisons Civil Rights Union) trató de que la reintroducción de los cargos militares se declarara ilegal recordándoles a los sudafricanos que: «Fue precisamente para terminar con el pensamiento de "los soldados en guerra" y para desarrollar un servicio policial democrático y responsable que la desmilitarización de la policía fue una parte importante de la política del Congreso Nacional Africano (ANC, African National Congress)».

El POPCRU no tuvo éxito. Sin embargo, es probable que la militarización haya prosperado de verdad en la política de orden público.

A principio de la década de los noventa, luego de que se levantara la prohibición de los movimientos de liberación, hubo discusiones entre estos movimientos y el gobierno apartheid. En ese momento el país estaba plagado de violencia política interna y se establecía una "división en la estabilidad interna". Luego de las elecciones de 1994, la unidad fue renombrada Policía Pública en consonancia con el tratamiento de las percepciones negativas que se tenían de las fuerzas de seguridad del apartheid.

Se adoptaron modelos progresivos de vigilancia policial y se hizo un control del orden público más sencillo. Según el testimonio de Tait y Marks en la edición N°38 de la publicación trimestral sobre el delito en Sudáfrica, You strike a gathering you strike a rock2, de diciembre de 2011: «El entrenamiento para la vigilancia del orden público hizo hincapié en cambiar el "control de la multitude" por el "manejo de las mismas". Se les pidió a los miembros de la unidad de vigilancia del orden público que pensaran en formas de vigilar a las multitudes que impliquen el uso mínimo de fuerza, que negociaran con representantes sindicales y autoridades sobre planes de vigilancia y sus resultados, que emplearan tácticas de vigilancia que demuestren tolerancia, que utilizaran armas que encajen en el nuevo marco de control de la gente».

Creo que es seguro decir que este modelo se guio por lo que se había previsto en la Ley de Regulación de Concentraciones que se aprobó poco antes del nuevo sistema. Sin embargo, una ley defectuosa en múltiples formas, se alejó de la vigilancia represiva hacia las concentraciones que llevo a cabo el gobierno apartheid. No obstante, la reestructuración en el paso de los años interrumpió el enfoque iniciado y emergió (o, posiblemente, volvió) un enfoque a la vigilancia del orden público de estilo más paramilitar. En un principio, estas unidades eran conocidas como Unidad Táctica de Respuesta (TRUs, Tactics Response Unity), pero, más tarde, se las volvió a llamar Vigilancia de Orden Público.

La frustración y la desilusión por el ritmo de la ejecución han dado origen a protestas frecuentes por la prestación de los servicios, muchas veces acompañadas de confrontaciones con la policía y destrucción de propiedades. Estudios han demostrado que estas protestas se salen realmente de control solo cuando las comunidades creen que los representantes del gobierno no las escuchan. Desde el año 2004, al menos 44 personas han muerto en las protestas en manos de la policía. Esta cifra incluye la masacre en Marikana, donde hubo 34 personas muertas y 78, heridas. Sudáfrica espera el resultado de la comisión de investigación sobre este incidente horrendo.

Debido al entrenamiento ofrecido por la policía francesa, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, South African Police Service) ha tenido una tendencia hacia el modelo de vigilancia del orden público usado por los franceses. Como advertencia con respecto a la aceptación de este modelo, Tait y Marks sostienen que las tácticas de la gendarmería francesa son efectivas, pero también se las critica por considerárselas paramilitares y se basan en demostraciones de fuerza. Desafortunadamente, la demostración de fuerza se está convirtiendo en una actividad habitual en la vigilancia del orden público.

Tanto la policía como la unidad de vigilancia del orden público se vieron involucradas en la matanza de Marikana. En ese momento, la Campaña de Cese de Hostilidades expresó su preocupación de que antes y durante el incidente propiamente dicho, a la policía le había faltado poner límites en situaciones de control de la multitud. El Cese de Hostilidades estaba insatisfecho también por el extenso poder de disparo que se mostró (demostración simbólica de poder por parte de una fuerza paramilitar) antes de que la policía abriera fuego, posiblemente, bajo la creencia errónea de que así detendrían a los manifestantes. La historia nos enseñó que en lugar de atenuar una situación de tensión, las armas tienden a agravarla.

Hubo una convocatoria para volver a capacitar a la Unidad de Vigilancia del Orden Público y se retomó el modelo que se usó en los primeros años de nuestra democracia. Jan Burger, del Instituto de Estudios de Seguridad (ISS, Institute for Security Studies) llamó la atención sobre secciones del Plan de Desarrollo Nacional 2030 de Sudáfrica (NDP, National Development Plan), tituladas

Sigue en página 3...

viene de página 2

"Nuestro futuro – hazlo funcionar". Este plan contiene varias recomendaciones de amplio alcance, que, según Burger, si se implementaran, podrían lograr mejoras impresionantes, no solo en el sector de vigilancia sino en todo el gobierno. «El NDP recomienda firmemente que se desmilitarice a la SAPS y que esto se haga lo más pronto posible. También recomienda que se revise la cultura organizacional de la policía a fin de evaluar los efectos de la militarización, la desmilitarización y la remilitarización y "las reiteradas crisis del cargo superior".

No obstante, Jan Burger sostiene que no hay suficiente contenido en las recomendaciones en cuanto a su comprensión de la militarización y la desmilitarización, y apoya la opinión de que volver a cargos antiguos que no eran militares no puede ser la única forma de desmilitarizar a la policía. Burger hace referencia a un seminario llevado a cabo por el ISS el 11 de abril de 2013, al que se tituló: "Comprender la brutalidad de la policía de Sudáfrica: desafíos y soluciones", en el que declara que se discutió que: «la policía no se militariza o desmilitariza solo a través de cambios de rangos. Por lo contrario, es mediante el lenguaje y el tono de sus líderes políticos y superiores que se contribuye a la creación de una forma de militarización».

Lamentablemente parece haber una brecha entre lo que el NDP recomienda y la percepción que tienen aquellos involucrados en la vigilancia sobre la restitución del estilo paramilitar de la vigilancia del orden público. En la sesión informativa parlamentaria de septiembre de 2014, no se hizo referencia al NDP y se mostró poca preocupación por el derecho a manifestarse de los ciudadanos que resultó ileso. La presentación aboga por un incremento de recursos de acuerdo con la naturaleza paramilitar de la unidad. Parecería que se están tomando medidas para imponer la autoridad del Estado sobre la disconformidad del liderazgo a través de la vigilancia del orden público hasta las elecciones municipales del próximo año.

En la declaración de una campaña llamada Derecho a Saber (R2K, Right to Know) publicada el 21 de Marzo, Día de los Derecho Humanos, la campaña exige que se respeten los derechos de las persona a la protesta, la libertad de reunión y la libertad de expresión y que estos sean protegidos por la policía. En conclusión: ¡la policía debe cambiar!

La creciente criminalización de las protestas es un ataque a la libertad de expresión y reunión. El derecho a la protesta estuvo en el centro de la lucha democrática por la libertad. Movilizar la fuerza bruta contra individuos sin armas es un insulto no sólo a la libertad de expresión y reunión consagrada en la Constitución, es un rechazo al legado de lucha que nos dejaron los miles de personas que pagaron el precio final.

El caso de Brasil: la experiencia de Israel en la represión al pueblo palestino se globaliza

En un mundo globalizado, cualquier análisis de la militarización y las ideologías, metodologías y tecnologías represivas ha de tener en cuenta la dinámica de importación y exportación de estos conceptos y herramientas a través de las fronteras. A nivel mundial, uno de los exportadores más importantes de la ideología y la tecnología de la represión es, sin duda, Israel. Con más de sesenta años de experiencia en la represión del pueblo palestino, así como en la expulsión de sus tierras, Israel ofrece con orgullo sus armas para la guerra y 'antidisturbios' como productos "probados en terreno" - ya sea durante las agresiones militares a gran escala repetidas contra territorio palestino o países árabes, o en el sometimiento cotidiano de un pueblo bajo ocupación.

No sorprende entonces que las empresas israelíes se encuentren entre los principales actores en las licitaciones para las enormes cantidades que se gastan en "seguridad" durante los llamados mega eventos, tales como las Copas Mundiales de Fútbol y los Juegos Olímpicos. Estos eventos se han convertido en uno de los medios más eficaces para abrir grandes mercados para mecanismos de control y represión, en la medida en que las preocupaciones sobre la privacidad, la libertad de expresión y otros derechos básicos son puestos de lado ante la excusa de la 'excepcionalidad' de los acontecimientos. Desafortunadamente, una vez que estos medios represivos están en su lugar, llegaron para quedarse.

La situación de Brasil, anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016, es ejemplar en este sentido: le ha brindado a las empresas militares y de seguridad israelíes un espacio enorme para la penetración en el ejército, la policía y las instituciones públicas de Brasil, con efectos negativos duraderos tanto en Palestina como en el pueblo brasileño. Esta cooperación en "seguridad" se suma a los negocios multimillonarios entre Brasil y los militares israelíes que se vienen desarrollando en la última década, los que, en clara contradicción con su discurso diplomático de apoyo a los derechos palestinos, han convertido a Brasil en el quinto mayor importador mundial de armas israelíes.

Esto ha creado una creciente oposición dentro de los movimientos sociales de Brasil, y la Red Nacional de Comités Populares de la Copa del Mundo, creada para defender al pueblo contra las violaciones de derechos humanos vinculados al Mundial de Fútbol, no sólo ha denunciado el impacto negativo de la cooperación militar con Israel sobre la población brasileña, sino que además consideró al pueblo palestino como uno de los directamente afectados por la Copa del 2014, debido al enorme flujo de caja que el gasto en "seguridad" reportó a la industria militar israelí. Los Juegos Olímpicos están repitiendo un escenario similar: el caso más ejemplar es la decisión del Comité Olímpico local de contratar a la empresa israelí Seguridad Internacional y Sistemas de Defensa (ISDS) para coordinar toda la operación de seguridad de los Juegos (con un gasto total de 2,2 millones de dólares), incluida la capacitación de agentes de la Policía de Brasil y el suministro de equipo. Además, ISDS recibirá espacio publicitario por valor de 20 millones. ISDS ya ha celebrado varios contratos de "seguridad", incluyendo Atenas (2004), Sudáfrica (2010) y los Juegos Panamericanos (2007). Sin embargo, esta vez la sociedad civil ha puesto en marcha una campaña, "¡No al

Sigue en página 5...



Minería, militarización y criminalización de la protesta social en América Latina

No es novedad que el extractivismo en América Latina ha ido imponiendo un modelo de extracción y exportación, cada vez más profundo. La competencia por ser destino de inversiones mineras, petroleras, forestales o pesqueras es una característica de la mayoría de los países de la región.

Sin embargo, el extractivismo recibe cada vez más críticas de amplios sectores de la sociedad incluida la academia y los movimientos sociales.

Entre las críticas más importantes se sitúa aquella que dice que el extractivismo no solo no sacará a los países de la pobreza y la dependencia, sino que los mantendrá en esa condición, que conocemos como “la maldición de la abundancia”1.

Nada tiene que ver esta maldición con “vivir sentados en un saco de oro” siendo pobres 2. Lo que reina en los programas económicos de los gobiernos latinoamericanos es la profundización del extractivismo para lograr más crecimiento o para pagar deudas sociales a través de bonos de diversa índole. Esto último ha devenido en una forma de mantener eternamente en los gobiernos a sectores progresistas, que mediante la bonocracia han capturado la votación mayoritaria, despidiéndose, de esta forma, de apoyos ideológicos para hacerse del poder ejecutivo. Incluso en ocasiones, ha generado conflicto con los movimientos sociales, como es el caso del gobierno de Correa en Ecuador, quienes les llevaron inicialmente a gobernar.

Esta maldición de la abundancia se ha transformado en la maldición del extractivismo. La imposición de proyectos mineros por ejemplo, ha redundado en una creciente cantidad de conflictos con comunidades locales, tanto así que hoy en América Latina no se conciben nuevos proyectos mineros sin conflictos socioambientales y resistencia comunitaria.

Se dice que el sector minero afronta tres enfermedades principales: la dificultad de encontrar nuevos yacimientos, el aumento de los costos de producción y la creciente falta de licencia social y rechazo comunitario.3

Las dos primeras enfermedades tienen soluciones técnicas. La tercera ha sido abordada con diferentes aproximaciones todas ellas sin éxito a la fecha. Inicialmente, el intento fue la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) mediante la creación de fundaciones y dádivas a las comunidades locales, convenientemente abandonadas por los Estados. Luego las políticas de “buen vecino”, acompañadas de cooptación, corrupción, división y descomposición social.El fracaso de esas estrategias llevó finalmente a empresas y gobiernos a imponer proyectos enfrentando la oposición social mediante la criminalización de la protesta.

Son en la actualidad constantes las denuncias de liderazgos antimineros con o sin fundamento, como fue el caso de Javier Ramírez, Dirigente antiminero de la comunidad de Intag, al norte de Quito en Ecuador. Luego de ser apresado injustamente, la comunidad fue militarizada, infundiendo mediante las armas el miedo. Si bien es cierto no se logró, como en muchos casos, neutralizar los rechazos comunitarios a la minería, si lograron la autosensura y temor a expresar abiertamente sus opciones al desarrollo.

Pero la militarización no sólo es parte de las políticas de gobiernos progresistas sino también a países que se han transformado en modelos mineros como el caso de Chile. Aquí, un contingente policial ha mantenido virtualmente secuestrada a la comunidad de Caimanes, al este del puerto de Los Vilos, mientras ésta se movilizaba y tomaba los caminos de acceso a las instalaciones de minera Pelambres de Antofagasta Minerals, nada más que para exigir un fallo judicial que determinaba la restitución de las aguas intervenidas por la minera para la construcción y operación de un traque de relaves. En el último período del conflicto, el pueblo de Caimanes se ha mantenido movilizado por más de 3 meses exigiendo lo que el máximo tribunal les otorgó y que la empresa se niega a dar cumplimiento.

La fuerza pública ha militarizado la zona desplazando a fuerzas especiales para impedir que la comunidad, mediante la presión social, obtenga finalmente su derecho consagrado por el fallo judicial de última instancia.

Tristemente célebre es también el caso de Máxima Acuña en la localidad de Celendín, Cajamarca Perú, donde la minera Yanacocha, conocida mundialmente por su atropello a los derechos humanos y el uso de la fuerza con su grupo de guardias privados “Forza”, ha logrado burlar fallos judiciales que han sido otorgados en reiteradas oportunidades a la familia de Máxima respecto de la propiedad de sus tierras. A pesar de haberse reconocido a esta familia derechos sobre terrenos reclamados por Yanacocha para desarrollar su proyecto Conga, siguen los acosos y atropellos como si la voz de la justicia se la llevase el viento.

Máxima fue criminalizada por la fiscalía, a solicitud de Yanacocha (popiedad de las empresas Newmont Mining Corporation, el grupo nacional peruano Cía. Nacional Buenaventura y International Finance Corporation IFC), y condenada en primera instancia a cárcel y pago de una indemnización a la minera. Luego, en apelación fue absuelta de todo cargo, reconociendo los derechos sobre sus tierras. Al parecer en Perú, esto no es suficiente y como la tendencia lo ha marcado, la criminalización es uno de los últimos recursos utilizados una vez que han fallado las otras estrategias de disuasión y convencimiento.

En los casos mencionados y muchos otros, la criminalización mediante judicialización ha sido una práctica permanente en países como Perú y Ecuador. En Perú, la mayoría de los casos de criminalización son sobreseídos en instancias superiores, lo que denota una complicidad entre gobiernos, empresas y parte de jueces locales, en casos que jurídicamente no se sostienen.

En Ecuador por el contrario, la dependencia política y el temor infundido a la justicia por parte del gobierno central ha logrado que se encarcelen a dirigentes injustamente y que zonas sean militarizadas para imponer proyectos extractivos. La falta de dependencia de la justicia en Ecuador ha logrado un alto grado de auto censura y el incremento de



Sigue en página page 5...

viene de página 4

los riesgos de oponerse al extractivismo generan mucha incertidumbre y temor en la población.

En Bolivia por su parte también han existido episodios de criminalización, especialmente en el caso de Cancio Rojas, dirigente de la comunidad Mallku Qota que se opone a un proyecto minero en Potosí, y que fue encarcelado injustamente. Pero tal vez lo más grave ha sido la estrategia de división por la fuerza de uno de los íconos del movimiento indígena del altiplano boliviano, nos referimos al Conamaq. Por medio de la violencia, y el uso de la fuerza pública provista de armas de servicio, el gobierno decidió quebrar la organización permitiendo el asalto a su sede y la agresión a sus dirigentes.

El motivo de estas medidas arbitrarias y antidemocráticas era la no aceptación del modelo extractivista del gobierno de Morales pues las comunidades afectadas reclamaban la pérdida de derechos frente a los proyectos mineros. Llama la atención que un presidente de origen indígena usase la violencia estatal para reprimir al movimiento indígena y sus demandas.

No estamos hablando de países donde legados de regímenes dictatoriales sean los que criminalicen y repriman a la población con el uso de la fuerza pública provista de armas de fuego como ha sido el caso de Guatemala y Honduras. Hablamos de gobiernos alternativos, llegados al control del ejecutivo con el apoyo incondicional de los movimientos sociales e indígenas y donde sin ellos no habrían tenido la oportunidad de gobernar.

Ello nos muestra que el extractivismo se ha instalado en América Latina como un acto de fe en mandatarios latinomericanos. Y como en otras épocas, se impone a sangre y fuego, costando a veces la vida, la libertad y la democracia de nuestros pueblos. No obstante, esto no ha mermado la resistencia que se manifiesta cada vez más masiva por la defensa y la recuperación de derechos imprescindibles para el sostenimiento de proyectos políticos de justicia y equidad en la región.

viene de página 2

Contrato de la Vergüenza!".

El fundador y director ejecutivo de ISDS, Leo Gleser, tiene una larga historia de trabajo con los militares y la inteligencia israelíes. Su empresa se levanta sobre su experiencia con la represión y la masacre del pueblo palestino, que ha volcado en contra de los pueblos de toda América Latina. Según la documentación existente, desde su fundación en 1982, la compañía ha estado involucrado con las dictaduras y golpes de Estado en Honduras, Guatemala, El Salvador y la formación de los "contras" en Nicaragua. En Guatemala, abiertamente ofreció clases de "terror selectivo" durante la época del genocidio. En Honduras, entrenó a los militares durante la dictadura en los años 80 y proveyó las armas que se utilizaron en el ataque a la embajada de Brasil, donde el presidente Zelaya estaba refugiado después de su derrocamiento en 2009. La compañía es una parte clave del sistema de intervención militar israelí según ha explicado el periodista israelí Yossi Melman: "El Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Mossad reciben una solicitud de asesoría en seguridad o para entrenar a ejércitos o fuerzas de seguridad del gobernante de un país, por lo general un dictador. Debido a que las autoridades no pueden, o no quieren, ayudar al gobernante directamente -aunque consideran su petición importante para la promoción de sus intereses políticos o de seguridad- le piden a una empresa privada que preste el servicio que se solicita".

Por desgracia, este contrato vergonzoso es sólo el punto cúlmine de la penetración del complejo militar y de seguridad interna israelí en Brasil.

En noviembre de 2009, un mes después de que Brasil fue seleccionado para acoger la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, el ex presidente de Israel, Shimon Peres, lideró una delegación de empresarios israelíes, asegurándole a Brasil que "en todo lo que ustedes deseen, estamos dispuestos a ayudar de cualquier manera a nuestro alcance". Tres meses después, el gobierno de Israel organizó un seminario sobre seguridad pública exclusivamente para las 8 autoridades de los Estados brasileños elegidos para acoger la Copa Mundial. Los talleres abordaron experiencias y propuestas israelíes en materia de seguridad en mega eventos, acciones antiterroristas, e introdujeron el concepto de "ciudad segura", basado en la vigilancia israelí de todas las llamadas telefónicas y conexiones web en Gaza. Coincidentemente, fue durante el evento que los políticos brasileños comenzaron a defender públicamente la aprobación de leyes antiterroristas que podría apoyar legalmente las acciones de represión durante los mega eventos.

Más tarde ese mismo año, se realizó en Tel Aviv la primera Conferencia Internacional sobre Seguridad Pública, a la que asistieron alrededor de 90 autoridades, gerentes de seguridad y empresarios brasileños, entre ellos Hilary Medeiros, gerente general de seguridad del Comité Organizador Local de la Copa Mundial. El paso más peligroso se produjo días después de este evento cuando el general Jorge Félix, Ministro Jefe del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de Brasil, firmó un acuerdo de cooperación militar secreta cuyos términos implicaron "detalles sobre acreditación de personas, organizaciones y empresas para enfrentar asuntos confidenciales, y sobre documentos de tránsito bilateral secreto". Este acuerdo espoleó aún más los esfuerzos del gobierno y la industria militar israelí para adjudicarse más contratos de inteligencia y de seguridad nacional en Brasil.

Entre 2010 y 2013, el consulado israelí en Brasil organizó varias reuniones con autoridades federales y gobiernos locales para presentar métodos y tecnologías represivas, además de proponer trabajos conjuntos en el área de "seguridad". Las reuniones consolidaron los vínculos institucionales y dieron lugar a una serie de cursos de capacitación para la policía civil y militar. Muchas conferencias, talleres y paneles organizados por las agencias gubernamentales y los empresarios locales y federales contaron con destacados expertos en seguridad israelíes (en la mayoría de los casos ex soldados que se transformaron en empresarios o consultores de seguridad) como sus principales panelistas. En algunos estados, la policía militar tenían la tarea de reunir a la policía con expertos en seguridad israelíes para impartir cursos.

La conexión con Israel sin duda no es la raíz del nivel endémico de abusos contra los derechos humanos cometidos por la policía brasileña, en especial contra los pobres y los negros. Sin embargo, cuando Amnistía Internacional citó la semana pasada, como una de las principales causas del aumento de la violencia policial, la llamada "lógica de la confrontación con el enemigo" en la policía, se hace evidente que la influencia israelí sólo ha empeorado la situación.

Para las personas en Brasil, el fortalecimiento de las relaciones militares entre Brasil e Israel es una amenaza seria porque la alta tecnología militar de Israel se va a utilizar principalmente contra la juventud negra y pobre y los movimientos sociales, y porque los entrenamientos de la policía y la cooperación militar consolidan un modelo de seguridad pública autoritario, punitivo -y fallido- lo que contribuye a llevar la violencia estatal existente a un nivel aún más dramático.

La campaña internacional de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) contra Israel, puesta en marcha en 2005 por la sociedad civil palestina, ha recibido un creciente apoyo de los movimientos sociales y la sociedad civil y ha presionado con éxito a los gobiernos, instituciones públicas y empresas para detener su cooperación y complicidad con el apartheid israelí. En Brasil, las campañas para un embargo militar sobre Israel - que ya llevó a la cancelación de un proyecto del gobierno para apoyar a la empresa militar israelí Elbit Systems en la construcción de un parque tecnológico aeroespacial en el sur de Brasil - también fortalece la lucha por la desmilitarización de la policía y por un modelo radicalmente democrático de seguridad pública.

Resistiendo la militarización de la policía

Ali Issa y Tara Tabassi

Como organizadores nacionales de la Liga de Opositores a la Guerra (WRL), y como personas que dedicamos nuestra vida a rechazar el militarismo en el mundo, son pocas las veces que experimentamos momentos en que nuestro trabajo une esfuerzos, donde el poder de la gente es mayor que la gente con poder. Pero muchos esfuerzos se unieron el 5 de septiembre, y pudimos sentir la fuerza de ese poder de la gente. Una congregación de muchas comunidades afuera del Hotel Oakland Marriott en Oakland, California –sede de la exposición de armas para la policía Urban Shield (Escudo urbano)– fue la culminación de meses de preparativos locales y nacionales en todo Estados Unidos. Hacia el final del día, nos emocionamos al escuchar el anuncio: la alcaldesa de Oakland, Jean Quan, prometió que Urban Shield terminaría su serie de ocho años y no se llevaría a cabo ahí el próximo año. A la vez que los organizadores celebrábamos esta novedad, también entendimos que era solamente el comienzo –no solamente de nuestro trabajo contra Urban Shield, sino en la cimentación de sinergia entre movimientos contra la guerra, el militarismo, la violencia policial y a favor de la autodeterminación de todas las comunidades en todo el mundo. Como dijo la coalición Stop Urban Shield en la declaración al día siguiente:

Sin embargo, los organizadores han afirmado que su trabajo está lejos de terminar. Aunque Oakland no sea sede de la feria y la capacitación, los organizadores no han recibido garantías de que la ciudad retirará su participación completamente, por ejemplo, brindando financiamiento de la ciudad, enviando agencias de la ciudad y ofreciendo lugares de la ciudad para futuros Urban Shields. En palabras de Lara Kiswani del Centro Árabe de Recursos y Organización: “Le decimos no a Urban Shield en cualquier lugar, le decimos no a la militarización en todas partes”.

Urban Shield se ha llevado a cabo en tres lugares: Boston, Massachusetts y el centro de Texas, además de Oakland, California. Además, esta expansión se hace evidente en el claro crecimiento del programa nacional de subvenciones, que brinda a Urban Shield su financiamiento: la Iniciativa Seguridad de Área Urbana (UASI). El programa del Departamento de Seguridad Nacional ofrece más de 500 millones en subvenciones a áreas urbanas de ‘alto riesgo’ en Estados Unidos, y aumentó en cerca de 30 millones solamente el año pasado. UASI ofrece equipo como drones y vehículos blindados, pero sobre todo, capacita a los departamentos de policía y a los equipos de respuesta de emergencia en tácticas de contraterrorismo. Es decir, Urban Shield, el ejemplo más claro y espectacular de exposiciones que impulsan el militarismo dentro de nuestras comunidades, tiene programas que funcionan en docenas de ciudades en todo Estados Unidos (39 el año pasado) al igual que sus primos más callados y más ubicuos. Además, el alcance de Urban Shield se siente globalmente, con vendedores destacados como Safariland. Este fabricante clave de armas exporta gas lacrimógeno y otras tecnologías represivas a Brasil, Bahréin y Canadá, por nombrar solamente algunos. Al mismo tiempo, los departamentos de policía de Israel, Grecia y los Emiratos Árabes Unidos compiten en las capacitaciones, adquiriendo e impartiendo estrategias militarizadas. No es raro que estas reuniones con frecuencia sostengan que la siguiente será “más internacional que nunca”.

Es exactamente por eso que nuestros esfuerzos de Stop Urban Shield también se han expandido, para concentrarse en su patrocinador principal –la Iniciativa Seguridad de Área Urbana. Es nuestra opinión que en vez de que las coaliciones entre diferentes comunidades tengan suficiente poder para retirar esta fuerza de sus comunidades, se usen estos recursos para respuesta a la emergencia que determine la comunidad sin que se amplíe el poder de la policía y el ejército. Esto ha surgido en la zona que recibe el mayor monto de fondos de UASI –la Ciudad de Nueva York–178 millones solamente en 2014. La iniciativa de WRL de “Retirar financiamiento al Ejército de [Comisionado] Bratton” ha recibido una respuesta entusiasta en la ciudad, pues Bratton anunció una nueva unidad de contraterrorismo llamada unidades “unidades de respuesta estratégica” a comienzos de este año. El Departamento de Policía de Nueva York no es solamente una fuerza local. Opera en once países afuera de Estados Unidos, que incluyen Yemen, Alemania, Afganistán e Israel para coordinar represión alrededor del mundo.
Como lo dijo Skanda Kadirgamar, integrante de WRL, en una reciente conferencia de prensa de ‘Seguridad más allá de la vigilancia policial’ en la Ciudad de Nueva York:

“Así como necesitamos reinvertir los 1,300 billones de gasto militar anual de Estados Unidos, la Ciudad de Nueva York tiene que asignar recursos para la construcción de comunidades, no para ocuparlas. Que las comunidades digan que el Departamento de Policía de Nueva York ‘ocupa’ sus vecindarios no es una metáfora. Es la experiencia que viven miles de neoyorquinos. El anuncio de Bratton de comienzos de año sobre el Grupo de Respuesta Estratégica, financiado por el Departamento de Seguridad Nacional, solamente destaca ese hecho. Nueva York no necesita ametralladoras ni tácticas contra el terrorismo, sino colegios y servicios de salud. ¡Inviertan en la vida!”
Urban Shield solamente hará más profunda la crisis de la violencia policial y la represión que nuestras comunidades enfrentan. En vez de aumentar la capacidad del Departamento de Policía de Nueva York para penalizar, controlar y matar gente, necesitamos recursos que mantengan a las comunidades prósperas, enteras y libres para florecer. No nos detendremos hasta tener eso. No detenernos significa que sabemos a dónde vamos. Saber qué mundo queremos, y vivirlo en nuestra práctica de resistencia. Saber que debemos transformar la cultura de represión y miedo que nos rodea en culturas de cuidados, apoyo y solidaridad. No detenernos significa iniciar algo radical que podríamos llamar no violencia revolucionaria.

viene de página 7.

substituyó una estructura de mando basada en un supuesto de que un comandante tendría acceso a inteligencia que los agentes sobre el terreno no tendrían –aumentando la posibilidad de que eficazmente, los agentes recibirían órdenes para disparar a matar, aunque los agentes nunca han admitido que Kratos llegase a ser así.
Más recientemente, las iniciativas de contraterrorismo han invitado a la participación del ejército en funciones policiales. Después de Charlie Hebdo y las matanzas en el supermercado judío de París, unidades del Servicio Aéreo Especial (SAS, por sus siglas en inglés, parte del ejército británico), después de ser destinados a Irak, Afganistán y Libia, fueron destinados a las calles del Reino Unido a trabajar con la policía en el mayor despliegue militar doméstico desde las Olimpiadas de Londres de 2012. El SAS está, aparentemente, trabajando junto a las unidades “Humint” –servicios de inteligencia encubierto usados en Afganistán e Irak, ahora destinados en las ciudades del Reino Unido-. Es difícil de ver cómo estas operaciones pueden ser llamadas a rendir cuentas; no hay casi ninguna información en el dominio público sobre estas unidades encubiertas o el SAS.

Un debate urgente

El espectáculo de las Fuerzas Especiales en las calles de París después de los asesinatos de enero es algo que, en otro momento, se hubiera considerado chocante –los comentaristas casi ni lo mencionaron-. ¿Refleja esto la aceptación tácita del borroso límite entre el ejército y la policía? Un ambiente de miedo generalizado parece estar reforzando la posición de aquellos que argumentan que una fuerza policial más militarizada es la única manera de mantener al público a salvo; en enero, la amenaza de unos ataques similares en el Reino Unido se usó como una justificación para mantener a 25 agentes armados en Manchester, que iban a ser jubilados.
Pero es justamente es estas ocasiones, cuanto el estado ve al sus propios ciudadanos como el “enemigo interior” que cuestionarse el uso de la fuerza dentro de la policía es incluso más importante. En su conjunto, estas tendencias hacia la militarización de la policía necesitan un debate urgente y mucho más amplio.

¿Se está pareciendo la policía británica cada vez más al ejército?



La reciente ola de oposición a la violencia policial en los Estados Unidos bajo el lema #BlackLivesMatter ha alertado al mundo del preocupante uso de fuerza letal por varias fuerzas policiales de los Estados Unidos contra las comunidades negras. Sin embargo, mirando más de cerca a algunas de las tendencias en la policía británica indican que el público británico no debería ser complaciente con su propia situación.

El concepto de “actividad policial por consentimiento” hace tiempo que ocupa un lugar especial en el discurso público sobre la actividad policial en el Reino Unido. Elaborado por el primer Director General de la Policía Metropolitana (el jefe de la policía londinense) a principios del siglo XIX, las prescripciones clave de la “actividad policial por consentimiento” son el uso mínimo de la fuerza, el reconocimiento de que el poder policial se deriva de la aprobación del público y la idea de que la policía cuenta con la “cooperación voluntaria”.
¿Pero son estos principios algo más que una bonita idea? Por lo menos en parte, fueron creados para ganarse al público que estaba receloso y alarmado con los esfuerzos del gobierno para establecer la policía metropolitana en primer lugar. Una opinión extendida en aquella época era que las fuerzas policiales deberían estar bajo el control local, en vez del control del gobierno nacional. Este es uno de los motivos por los que hasta el día de hoy, el Reino Unido no tiene una fuerza policial nacional a diferencia de muchos otros países.

Pero las comunidades negras y de emigrantes británicas siempre han sufrido una vigilancia policial desproporcionadamente fuerte, así que “la actividad policial por consentimiento” nunca ha sido universal, si alguna vez existió. De hecho, hay una larga y vergonzosa historia del uso de la fuerza letal por parte de los policías británicos –y una falta de rendición de cuentas básica para las familias de las víctimas-. Acontecimientos recientes en el uso de armas y una desdibujada frontera entre el ejército y la policía ofrecen más motivos para la preocupación.

Arsenal
La controvertida compra de tres cañones de agua en 2014 suscitó la preocupación pública de que el ideal de una fuerza policial desarmada estaba bajo amenaza. El uso potencial de este tipo de arsenal, junto con la reducción de las libertades de manifestación y reunión, plantearon serias dudas sobre la capacidad de los ciudadanos británicos para ejercer sus libertades democráticas. A principios de este mes, la Secretaria de Interior parecía titubear sobre este asunto cuando anunció que el uso de los cañones de agua no sería aprobado hasta después de las elecciones generales del Reino Unido en mayo.

Quizás, incluso más preocupante, es el uso rutinario de Tasers (pistolas de electrochoque manufacturadas por una empresa llamada Taser International). Introducidas en un principio para ser usadas por oficiales especializados, las Tasers son ahora distribuidas a policías de a pie. Aunque catalogadas como “menos letales”, Amnistía informa que en los Estados Unidos, desde 2001, ha habido más de 500 muertes después de descargas con Tasers bien durante el arresto o mientras en la cárcel. En el Reino Unido, los casos individuales del uso de Taser han aumentado abruptamente en los últimos años y ahora está en los miles cada año. Recientemente han salido unas cifras mostrando que las Tasers eran usadas desproporcionadamente en las comunidades negras en Londres y que, niños de tan solo 11 años, estaban siendo sometidos a las Tasers. La Secretaria de Interior ha pedido una revisión de su uso.



El brazo largo de la ley
Sin embargo, estos últimos debates públicos sobre el nuevo arsenal no deberían distraernos de la preocupante larga historia del uso de la fuerza, a veces letal, por las fuerzas policiales británicas.

La política sobre armas de fuego del Reino Unido es rara entre las fuerzas armadas a nivel global, en que los oficiales no van armadas “rutinariamente”. Sin embargo, unidades armadas existen para apoyar a las fuerzas individuales. Parte de su papel es responder reactivamente a incidentes relacionados con armas. Pero las unidades armadas también son usadas “proactivamente” en operaciones policiales relacionadas con la droga, las armas de fuego y el contraterrorismo. Estas operaciones “proactivas” se basan fuertemente en el manual militar, usando redadas al alba y dependiendo de los métodos de recogida de información que están exentos del escrutinio público ya que se mantienen secretos en subsiguientes procesos judiciales. Otra táctica particularmente polémica usada por las unidades armadas es la “parada dura”: agentes en coches de policía, armados, en ropa de calle, interceptan otro vehículo para confrontar a los sospechosos usando una agresión física extrema diseñada para dar “conmoción y pavor” a los sujetos para que se rindan.

Las trágicas muertes de Azelle Rodney en 2005 y Mark Duggan en 2011 a manos de agentes armado después de dos de estas operaciones “paradas duras” preparadas de antemano, demostraron un número de similitudes. A través de los procesos de investigación y consulta, se ha establecido que no hubo una planificación suficiente, inteligencia limitada y alguien que no constituía una amenaza inminente y ni portaba ningún arma fue matado a tiros. Otras muertes por disparos de la policía que no incluían una “parada dura”, como Anthony Grainger en 2012, Jean Charles de Menezes en 2005 y Harry Stanley en 1999 también demuestran la trágicas consecuencias de combinar la fuerza letal con estereotipo, conjetura e inteligencia limitada.

El tirador de la policía que disparó a Azelle Rodney ocho veces en la cabeza y el cuerpo ahora se enfrenta a un cargo de asesinato. Sin embargo, las tragedias que resultan del uso de fuerza letal por parte de la policía, en general, no atraen diligencias penales, incluso en las raras ocasiones en que las investigaciones declaran un veredicto de “asesinato ilegal”. De hecho, no ha habido un enjuiciamiento por homicidio exitoso de un policía por una muerte bajo custodia en los últimos 30 años. Las rutas legales vitales para impugnar estas tácticas policiales siguen estando, en gran parte, fuera del alcance de las familias y del público en general.

El Contraterrorismo: el campo de batalle viene a casa
Está especialmente claro lo difuminado que la policía y el ejército se han convertido en el ámbito del contraterrorismo. La polémica sobre la manera en la que estas operaciones estaban siendo dirigidas salió a la luz por primera vez después de la muerte del electricista brasileño Jean Charles de Menezes, muerto a tiros en su camino al trabajo en un vagón del metro por agentes ejecutando una operación de contraterrorismo chapucera a raíz de los atentados de Londres del 7/7 en 2005. Posteriormente se supo que había habido una serie de fallos en la comunicación y estrategia dentro de la operación policial. Al menos parte de la confusión surgió de la ley “Kratos” –una serie de protocolos contraterroristas que habían sido desarrollados después del 11/9 después de consultar con una variedad de fuerzas policiales nacionales, incluidas las de Israel y Sri Lanka.

Lo que sorprendió a mucha gente en el periodo posterior fue que la ley Kratos recomendaba múltiples disparos en la cabeza: de Menezes fue disparado en la cabeza siete veces. Lo que no fue tan señalado fue que la justificación legal habitual para el uso de la fuerza fue neutralizada por el nuevo protocolo. La directriz convencional para armas de fuego non-Kratos dicta que los agentes solo deben disparar cuando hay una amenaza inmediata y que este criterio jurídico se aplica a cada disparo individual. En su lugar, Kratos

Sigue en página page 6...

La titulizacion de ayuda en Irak y el guiado por la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad

Es posible que la situación sea peor en Irak, donde las agencias de la ONU dependían de la protección de los soldados estadounidenses hasta la partida oficial de Irak, en 2011, del ejército norteamericano. Esto significa que, cada vez que cualquier oficial de la ONU se desplazaba por Bagdad y otras áreas fuera del Kurdistán iraquí, solo lo hacía con la escolta de las tropas de EE. UU. Cualquier visita a ciudadanos locales, cualquier entrega de suministros eran “facilitadas” por las tropas estadounidenses. Está claro que, después de la casi guerra civil de 2006-2007 en ciertas partes de Irak, se necesitó algún tipo de protección para las agencias humanitarias, pero para ese entonces EE. UU. se había convertido en ocupante y así, por extensión, la prestación de ayuda se percibió como una ocupación. Después de que las tropas partieran, la ONU proporcionó su propia seguridad para las misiones, pero mientras, las diferentes nacionalidades de la ONU y la postura no agresiva de los soldados de la ONU que brindan protección podrían pensar distinto de los miembros del personal de dicha organización. Ponte en el lugar de un ciudadano de Faluya o Ramadi que ve llegar un convoy blindado; los logos podrían ser diferentes, pero los soldados todavía están allí. Es bastante difícil que se sienta neutral o imparcial. Y ahora la ONU está atascada: la protección se ha convertido en una necesidad que se autoperpetúa. Cuanto más te desplaces en convoyes fuertemente armados, más vas a necesitar hacerlo, en parte, porque te convertirás en un blanco fácil de identificar. La ONU tiene una historia peculiar en Irak, rechazada a nivel mundial, que se relaciona con las sanciones por corrupción y falta de combustible para alimentos durante los noventa. Pero la forma de ganarse la confianza fue, podría decirse, no terminar disfrazados de ejército estadounidense: mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF son unas de las pocas entidades internacionales que en la actualidad se las arreglan para conseguir asistencia para los necesitados de Ambar, es a través de ese prisma de ocupación por el que ellas serán vistas. Las ONG internacionales entraron en Irak, en gran medida, debido a la invasión norteamericana y, aunque muchas se esfuerzan por cumplir con los principios humanitarios y trasladarse sin la protección armada que las agencias de la ONU exigen, necesitan trabajar de manera ardua para evitar que las asocien con la ocupación.
 de un ciudadano de Faluya o Ramadi que ve llegar un convoy blindado; los logos podrían ser diferentes, pero los soldados todavía están allí. Es bastante difícil que se sienta neutral o imparcial. Y ahora la ONU está atascada: la protección se ha convertido en una necesidad que se autoperpetúa. Cuanto más te desplaces en convoyes fuertemente armados, más vas a necesitar hacerlo, en parte, porque te convertirás en un blanco fácil de identificar. La ONU tiene una historia peculiar en Irak, rechazada a nivel mundial, que se relaciona con las sanciones por corrupción y falta de combustible para alimentos durante los noventa. Pero la forma de ganarse la confianza fue, podría decirse, no terminar disfrazados de ejército estadounidense: mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF son unas de las pocas entidades internacionales que en la actualidad se las arreglan para conseguir asistencia para los necesitados de Ambar, es a través de ese prisma de ocupación por el que ellas serán vistas. Las ONG internacionales entraron en Irak, en gran medida, debido a la invasión norteamericana y, aunque muchas se esfuerzan por cumplir con los principios humanitarios y trasladarse sin la protección armada que las agencias de la ONU exigen, necesitan trabajar de manera ardua para evitar que las asocien con la ocupación.

También existe una pregunta legítima sobre si la ayuda se puede proporcionar de forma neutral en un conflicto donde, como mínimo, las agencias humanitarias tendrán que negociar con muchas facciones diferentes para poder prestar asistencia. El Comité Internacional de la Cruz roja (CICR) y, de hecho, la misma OCAH utilizan ejemplos de múltiples negociaciones para demostrar su neutralidad, pero son pocas las organizaciones con semejante capacidad.4 Durante muchas décadas, los agentes humanitarios tomaron parte y fallaron en esa prueba implícita de neutralidad, con frecuencia, por una buena razón (un buen ejemplo es la asistencia a los rebeldes de Eritrea y Tigray a lo largo de la guerra civil etíope). No obstante, dos cosas cambiaron de manera explícita desde las invasiones a Afganistán e Irak: el suministro directo de ayuda por parte del ejército ha llevado al beneficiario a una relación tipo colonial y la constante titulización de asistencia limita tanto el acceso como la eficacia.

En Afganistán e Irak, las justificaciones de la invasión y los testimonios de los soldados participantes dejan en claro que las misiones rápidamente cambiaron a situaciones donde los soldados creían que estaban en una misión humanitaria, en el caso de Afganistán, para contribuir con el impulso del desarrollo económico y, en cuanto a Irak, para ayudar a traer la democracia. Otros aducen que la creación de equipos de reconstrucción en Afganistán dejó poco legado y fracasó en no darles espacio a las agencias de desarrollo no militares para crear relaciones y proveer un compromiso a más largo plazo.5 Los equipos de reconstrucción se asociaron con los objetivos políticos y militares de los ocupantes y no con los de las agencias de desarrollo neutrales o imparciales.

Es posible que la situación sea peor en Irak, donde las agencias de la ONU dependían de la protección de los soldados estadounidenses hasta la partida oficial de Irak, en 2011, del ejército norteamericano. Esto significa que, cada vez que cualquier oficial de la ONU se desplazaba por Bagdad y otras áreas fuera del Kurdistán iraquí, solo lo hacía con la escolta de las tropas de EE. UU. Cualquier visita a ciudadanos locales, cualquier entrega de suministros eran “facilitadas” por las tropas estadounidenses. Está claro que, después de la casi guerra civil de 2006-2007 en ciertas partes de Irak, se necesitó algún tipo de protección para las agencias humanitarias, pero para ese entonces EE. UU. se había convertido en ocupante y así, por extensión, la prestación de ayuda se percibió como una ocupación. Después de que las tropas partieran, la ONU proporcionó su propia seguridad para las misiones, pero mientras, las diferentes nacionalidades de la ONU y la postura no agresiva de los soldados de la ONU que brindan protección podrían pensar distinto de los miembros del personal de dicha organización. Ponte en el lugar de un ciudadano de Faluya o Ramadi que ve llegar un convoy blindado; los logos podrían ser diferentes, pero los soldados todavía están allí. Es bastante difícil que se sienta neutral o imparcial. Y ahora la ONU está atascada: la protección se ha convertido en una necesidad que se autoperpetúa. Cuanto más te desplaces en convoyes fuertemente armados, más vas a necesitar hacerlo, en parte, porque te convertirás en un blanco fácil de identificar. La ONU tiene una historia peculiar en Irak, rechazada a nivel mundial, que se relaciona con las sanciones por corrupción y falta de combustible para alimentos durante los noventa. Pero la forma de ganarse la confianza fue, podría decirse, no terminar disfrazados de ejército estadounidense: mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y UNICEF son unas de las pocas entidades internacionales que en la actualidad se las arreglan para conseguir asistencia para los necesitados de Ambar, es a través de ese prisma de ocupación por el que ellas serán vistas. Las ONG internacionales entraron en Irak, en gran medida, debido a la invasión norteamericana y, aunque muchas se esfuerzan por cumplir con los principios humanitarios y trasladarse sin la protección armada que las agencias de la ONU exigen, necesitan trabajar de manera ardua para evitar que las asocien con la ocupación.

La situación de Kurdistán es diferente, en cierta medida, por la relativa estabilidad en ese lugar, lo que significa que la ONU y otras agencias internacionales han resistido mejor la lenta y progresiva titulización de la ayuda. Es posible que las agencias de la ONU viajen por Kurdistán sin protección. Las consecuencias son que casi toda la asistencia prestada hoy por hoy a los iraquíes desplazados como resultado del crecimiento del llamado Estado Islámico se da en el Kurdistán iraquí. Las últimas cifras de la ONU sugieren que más de 2.6 millones de personas han sido desplazadas de Irak. Solo alrededor de la mitad de estas se encuentra en Kurdistán. Hay personas necesitadas en áreas de conflicto en Ambar, Nínive y Diala. ¿Dónde está la ayuda imparcial que les llega? Diría que ninguna entidad internacional sobre el terreno iraquí

Sigue en página 9...

viene de página 8

se atreve a negociar el acceso con las fuerzas insurgentes o incluso con los líderes tribales porque los trabajadores humanitarios se identifican ahora de forma total con uno de los lados del conflicto y la "protección" necesaria para operar en zonas de conflicto acentúa la asociación con un lado.

En Siria, es posible argumentar que las ONG internacionales se empeñan en ser imparciales: trabajan con una variedad de entidades, tanto en el Gobierno como en las zonas controladas por los rebeldes, y están dispuestas a conseguir ayuda para aquellas áreas controladas por toda clase de grupos. Sin embargo, la cantidad de asistencia que se obtiene es muy limitada y las grandes agencias de la ONU se sienten frustradas por las restricciones de trabajar dentro de los límites de un sistema que exige la aprobación del Gobierno y, con frecuencia, seguridad gubernamental.

Conclusión

La militarización y subsecuente titulización de la prestación de asistencia tanto humanitaria como para el desarrollo en Irak han limitado de manera grave la habilidad de la ONU de proporcionar ayuda a aquellos que más lo necesitan y han debilitado el compromiso mundial para una asistencia imparcial, brindada de forma independiente. En Siria, tampoco es posible proporcionar ayuda independiente, pero mediante el trabajo con una amplia variedad de grupos, las ONG internacionales han demostrado que todavía se puede ser imparcial y, así, intentar llegar a aquellos que más lo necesitan. A pesar de las dificultades, se está más cerca de implementar la visión de la ONU de brindar asistencia de forma independiente y guiada por la humanidad, la neutralidad y la imparcialidad que de la propia ONU. También demuestra positivamente que mediante el trabajo con entidades locales todavía es posible fomentar y adherirse a los principios humanitarios. Todas las organizaciones humanitarias deberían continuar resistiendo la titulización de asistencia de ser posible.

"Vigilen sus espaldas" – Comentarios sobre la militarización de Sri Lanka

Prasanna Ratnayake

Sri Lanka tiene una larga historia de violencia armada y masacres desde que se independizó de Gran Bretaña en 1948. Hubo disturbios étnicos en 1953, '58, '77, '83 y '87; dos levantamientos en 1971 y 1986-90; y 30 años de guerra civil entre los Tigres de Liberación del Ealam Tamil (LTTE, por la sigla en inglés, o tigres tamiles) del Norte y el Este y los nacionalistas cingaleses del Sur. La guerra finalizó el 19 de mayo de 2009 con la masacre de decenas de miles de civiles tamiles. Para ese entonces, más de 300.000 personas se habían convertido en desplazados internos.

Los puntos de este texto abordan los 10 años desde que Mahinda Rajapaksa, exabogado especialista en derechos humanos, asumió el poder en noviembre de 2005 hasta la caída de su régimen, el 9 de enero de 2015. Una combinación de partidos políticos —ultranacionalistas budistas cingaleses, socialistas, marxistas y el partido de los monjes budistas— había apoyado la candidatura de Rajapaksa. Desde el momento en que se convirtió en presidente, prácticamente de la noche a la mañana, ingresamos en el período de lo que se convertiría en un estado militarizado por completo. Una mañana, nos despertamos y encontramos puntos de control del ejército, vehículos militares, policías y soldados por todas partes. Cynthia Enloe lo describió muy bien: ""La militarización es el proceso paulatino por el cual algo pasa a ser controlado por, depende de o deriva su valor del ejército como institución o de criterios militaristas" (Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives, University of California Press, Berkeley, 2000).



En 2005, tuvo lugar el tercer año del cese al fuego de la guerra civil, mediado y monitoreado por los noruegos. Había habido algunas rondas de conversaciones de paz, pero se había avanzado poco y se sabía que la interrupción de los enfrentamientos había sido usada por los dos bandos como preparación para el próximo asalto.

En el Sur, con la llegada de los Rajapaksa, la militarización no se vio solo en las calles. Todos los medios de comunicación masiva habían cambiado de tono: la militarización se volvió predominante y la cultura popular se convirtió en cultura militar. En lugar de dar noticias sobre las conversaciones de paz y los dividendos de la paz, los artistas, los cantantes, los actores y los modelos de alta costura pintaban, cantaban, bailaban, desfilaban y hacían anuncios patrióticos. Se emitían una y otra vez videoclips de películas sobre las atrocidades cometidas con anterioridad por los tigres tamiles —por ejemplo, la explosión de una bomba en 1987— para aumentar el temor, el odio y la inseguridad entre los cingaleses y prepararlos para el regreso a la guerra.

Se diseñó un concurso para el personal militar basado en American Idol: ¿quién podría cantar mejor una canción patriótica? Un anuncio publicitario mostraba a una mujer con varios meses de embarazo que le cedía su asiento en el autobús a un soldado. Los bebés y los niños tenían vestimenta con camuflaje y las mujeres usaban bufandas con estampado camuflado. Los individuos y las empresas juntaban cantidades enormes de dinero para garantizar el bienestar de los soldados. El reclutamiento se disparó. Se mostraba a los líderes religiosos en los noticieros de televisión mientras bendecían a nuevos contingentes armados. Las fuerzas civiles de defensa se instalaron en templos budistas y las escuelas montessori se convirtieron en centros de coordinación para los programas de "fortaleza nacional".

Al mismo tiempo, los tigres tamiles continuaron con su gobierno militar ya de por sí severo: reclutaron niños para ser soldados, monitorearon toda la actividad civil, controlaron los bancos, los servicios postales, el transporte, las escuelas, su propio sistema jurídico, compraron más equipamiento militar y enviaron atacantes suicidas al Sur.

En menos de un año, se reanudó la guerra. Las fuerzas cingalesas tardaron tres años para aplastar definitivamente a los tigres tamiles. El presidente Mahinda describió esa masacre como una "operación humanitaria" en la que no hubo ninguna víctima civil: "Nuestras tropas llevaban un arma en una mano y una

Sigue en página 10...

viene de página 9.

copia de la carta de los derechos humanos en la otra". El hecho de que esta operación conllevó mentiras, ejecuciones extrajudiciales, masacres y una cantidad incontable de delitos contra la humanidad ha quedado bien documentado en la cobertura de la prensa extranjera y en un informe de las Naciones Unidas que afirmaba que al menos 40.000 civiles fueron asesinados en la batalla final. Otros organismos aseveraron que el total de víctimas fue mucho más grande. Esas denuncias dieron lugar a demandas reiteradas para que Sri Lanka se presentase ante un tribunal internacional de crímenes de guerra.



Foto: Universidad de Colombia, 2012

La militarización no terminó con la victoria final. Pocos meses después de haber comenzado el 2010, el héroe de guerra y presidente Rajapaksa convocó a elecciones y ganó con facilidad su segundo mandato. Hizo importantes reestructuraciones del gabinete. Su hermano Gotabaya, uno de los ideólogos de la guerra, continuó como Secretario de Defensa y el Ministerio de Defensa se hizo cargo de la cartera de la Dirección de Desarrollo Urbano.

La Dirección de Desarrollo Urbano empleó soldados para trabajar en el nuevo Proyecto de Embellecimiento de la Ciudad, lo cual implicó despejar los barrios marginales para poder vender los terrenos a inversionistas chinos e indios, crear y administrar parques públicos, áreas de juego, centros comerciales, hoteles para turistas, restaurantes, salones de belleza y otras mejoras.

Por orden del presidente ejecutivo, Mahinda Rajapaksa, a todos los estudiantes universitarios se les exigió hacer un curso de disciplina militar y a todos los directores de escuelas se les exigió recibir entrenamiento militar, donde fueron convertidos en coroneles.

Los exmilitares tomaron el control de los servicios civiles y extranjeros, y en las ciudades los hombres merodeaban por las calles cada 100 metros monitoreando quién pasaba y qué ocurría. Usaban vestimenta civil pero aún tenían sus botas militares. Los "secuestros en camionetas blancas", que habían comenzado en 2005, se apoderaron de cada vez más cantidad de personas, donde los periodistas eran un blanco en particular. Algunos simplemente desaparecieron, otros fueron encontrados muertos algunos días después con marcas de haber sido torturados. La violencia extrema se volvió normal y el régimen nos mantuvo bajo las riendas de su terrorismo de estado. Cientos de periodistas y activistas de los derechos humanos huyeron del país. El presupuesto de defensa nacional fue más elevado que durante la guerra.

En las regiones tamiles del Norte y el Este que habían sido conquistadas, el personal militar cingalés reemplazó a todos los gobernadores, los administradores locales y los policías. En Jaffna, había un soldado cada diez habitantes del lugar y la demografía se encontraba en cambio. El gobierno organizaba viajes de turismo de guerra destinados a los sureños, para que vieran el monumento a la victoria, el territorio conquistado y las personas traumatizadas.

El 9 de enero de este año, casi por milagro, el régimen de Rajapaksa perdió las elecciones. El nuevo gobierno se ha movido con cuidado y cautela para comenzar el proceso complejo de traer cordura a un país frágil, acobardado y exhausto. El objetivo es reinstaurar la ley y el orden, sanar el vínculo roto entre las comunidades étnicas y religiosas, crear confianza en el gobierno y en la sociedad civil desde la base y recuperarse del tsunami de injusticia y crueldad.

En los últimos tres meses, se han realizado movimientos sensatos y alentadores. Quiero creer que la cantidad enorme de trabajo necesario para la transformación continuará; que podemos tener un futuro en paz, reconciliación y unión. A decir verdad, después de toda una vida de brutalidad y horror, aunque siempre creí en la resistencia y la creatividad de mi pueblo, tengo miedo de sentir demasiada confianza. No quiero terminar así, pero una vez más Cynthia Enloe lo expresó bien: "Lo que se ha militarizado se puede desmilitarizar. Lo que se ha desmilitarizado se puede remilitarizar".

viene de página 11.

celebrar la victoria de la democracia y libertades individuales en el país, como muchos conservadores y liberales han estado reclamando. ¿Podemos realmente concluir que el retiro de las fuerzas armadas como una institución de la esfera política ha creado una zona "libre de militarismo" no violenta para la política? El infame récord en derechos humanos de los 13 años de gobierno AKP da pocos motivos para el optimismo en este sentido. Durante su periodo en el poder, el AKP ha llevado a cabo algunos cambios profundos en la ley, expandiendo el poder extrajudicial de la policía, relajando los controles sobre su uso de la fuerza y haciéndola menos responsable ante el escrutinio judicial. Inició la Ley de Delitos Menores en 2004, que incremento los poderes policiales de intervención en la vida diaria de los ciudadanos a través de ciertas medidas de "prevención criminal". En 2006, hizo importantes cambios a la Ley Antiterroristas que dio a las autoridades estatales más derechos que llevó a violaciones y restricciones en las libertades. Finalmente, promulgó la nueva Ley de Seguridad Interna que expandió, significativamente, los poderes extrajudiciales de la policía, por medio de legislación más consistente con un régimen militar autoritario. Dado todos los cambios introducidos por este gobierno entonces, ¿qué puede uno concluir sobre el llamado éxito del AKP en términos de desmilitarización de la política turca?

Argumentaría que no ha habido una desmilitarización, simplemente otra forma de militarización disfrazada de un juego de poder institucional entre las élites militares de un lado y un gobierno conservador-neoliberal listo para incautar el legado del golpe de Estado militar, concretamente la fuerza policial, en el otro. El último ha ganado el juego, a menos de momento. Parece que ahora es el turno del AKP de crear su propio "estado de seguridad nacional" que está consiguiendo usando la policía cuyos valores y estructura organizacional es heredada del golpe de Estado militar de 1980. Teniendo esto presente, el ganador último, desde mi punto de vista, no ha sido un grupo particular o partido político pero –quizás con más pesimismo- la mentalidad traída por el golpe de Estado militar de 1980.

La Nueva Ley de Seguridad y los Valores Militares de la Policía en Turquía

Semih Sapmaz

Una nueva ley de seguridad interna que da poderes draconianos a la policía ha entrado en vigor recientemente en Turquía. Expande enormemente el poder de la policía y le otorga alguna autoridad extrajudicial, la ley no concede medidas apropiadas a los ciudadanos con las que protegerse del abuso de este poder. Ampliamente criticado por la oposición, tanto dentro como fuera del parlamento, la nueva ley otorga unos poderes de búsqueda a la policía más amplios, les da autoridad extrajudicial para detener y expande su control sobre el uso de armas de fuego, mientras define nuevos crímenes para los manifestantes como cubrirse la cara o usar hondas –con condenas de prisión de hasta 4 años-.1 Mientras, como era de esperar, el gobierno defendió la ley como una garantía para mantener el orden público, la oposición la declaró una manifestación del "estado policial" del partido gobernante. Argumentaría aquí que mientras que el contenido de la ley puede ser nuevo, los valores en los que se basa llevan mucho tiempo establecidos en la política turca; que son los "valores militares". Más aún, sostendría que todas y cada una de las piezas de la legislación que incrementan los poderes de la policía debería entenderse como otra forma de militarización que caracteriza al gobierno de AKP, la militarización de la policía. Para aclarar este punto, empezaré con una descripción breve de la relación entre estos términos.

La Militarización de la Policía

El militarismo, para usar brevemente los términos de Enloe, se trata de "ver al mundo como un lugar peligroso al que es mejor acercarse con actitudes militaristas", que se basa en la creencia de una jerarquía, obediencia y el uso de la fuerza.2 Aunque las fuerzas armadas, como institución, juega un papel central en este proceso, los instrumentos estatales reproduciendo esta mentalidad se extienden mucho más allá de los cuarteles. La policía, como una institución estatal no militar con la capacidad de usar la fuerza física en la regulación de las relaciones interpersonales en el día a día, se convierte en altamente instrumental en este proceso. Esto es especialmente así en el contexto de los estados democráticos liberales donde la capacidad de las fuerzas armadas para intervenir en el día a día de los ciudadanos está excepcionalmente restringida y, por lo tanto, el valor instrumental de la policía en la normalización de los "valores militares" más allá del cuartel se merece una atención especial. La militarización de la policía en este contexto tiene grandes implicaciones para la militarización de la sociedad en general.

¿Qué quiere decir exactamente el término "militarización de la policía"? Según Costa y Medeiros, tiene dos modalidades: la militarización interna y externa. Mientras la primera se refiere a "el grado de ideología militar y estructura organizacional que adopta una fuerza policial", la segunda se refiere a "la medida en la que las fuerzas armadas ejerce una influencia sobre las organizaciones policiales".3 Además, la militarización de la policía también se refiere a la adopción de unos "valores militares" en sus operaciones. El término connote la creciente dependencia de la policía en "eficacia" y "rendimiento" en vez de "proporcionalidad" en el uso de la fuerza.4 Con la flexibilización de los controles sobre las operaciones policiales junto con la ampliación de los poderes policiales sobre el uso de la fuerza, el caso turco proporciona un buen ejemplo de este proceso. Habiendo establecido este marco, ahora podemos centrarnos en el caso turco en la práctica.



Un cartel de la policía en Turquía. El texto dice "Estoy con la corrección, la legalidad, la misericordia: Estoy contigo."

La Militarización de la Policía en Turquía

Una reciente investigación en la subcultura de la policía turca revela que "el conservacionismo-nacionalista", que equivale a "un apoyo ferviente de la identidad turca y al islam suní", es la orientación política dominante entre los miembros de la organización.5 Es en relación a esta afiliación ideológica que muchos segmentos de la sociedad, como la Izquierda, los Kurdos y los Alevíes, están "enemistados" con la práctica policial y su discurso.6 Los disidentes son reducidos a "enemigos internos" confabulando contra el estado y se les considera indignos de los derechos que disfrutan los "ciudadanos correctos". El infame récord de la policía turca en el uso desproporcionado de la fuerza es una manifestación de esta situación donde los manifestantes pueden ser privados de sus derechos más básicos –incluso su derecho a la vida-7 en el interés de proteger el orden público. Esto "deshumaniza" a los sujetos disidentes, reduciéndoles a enemigos que tienen que ser derrotados, parecido a un ambiente de campo de batalla donde los derechos constitucionales de uno dejan de tener validad.

Junto a este trasfondo ideológico, la práctica de valores militares también puede ser detectada en la estructura organizacional de la policía turca. Las Unidades de Acción Rápida (RAU, por sus siglas en inglés -Çevik Kuvvet-) y los Equipos de Operaciones Especiales (SOTs, por sus siglas en inglés –Özel Harekat Timleri-) son dos de los ejemplos más obvios de esta militarización organizacional. Establecidos por el gobierno militar después del golpe de Estado de 1980, a las RAU se le dio poderes legales para tomar medidas reactivas y proactivas en respuesta a las demostraciones y actos ilegales en los espacios públicos; están equipadas con armamento avanzado como las bombas de gas lacrimógeno, ametralladoras y cañones de agua y tienen ciertos poderes discriminatorios sobre el uso de la fuerza, los cuales fueron ampliados aún más con la nueva ley de seguridad.8 Los SOTs -equipados con armamento pesado y actuando en colaboración con las fuerzas armadas- fueron establecidos por el mismo gobierno de 1980, con el objetivo específico de luchar contra los rebeldes kurdos en las provincias del sureste.

Como muestra la formación de estas dos nuevas unidades, los "valores" de la policía en Turquía está orgánicamente relacionada a la influencia militar. De hecho, según Biriz Berksoy, fue después del golpe de Estado de 1980 que;

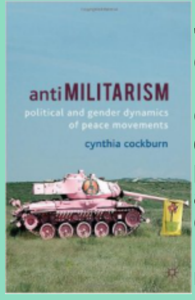
la policía entró una fase de expansión y militarización, durante la cual fue estructural y legalmente fortalecida con la ayuda de las fuerzas armadas y empezó a aplicar la violencia con más frecuencia e intensidad a través de unidades paramilitares de nueva creación.

Argumentaría que destacando estas relaciones orgánicas arraigadas entre las fuerzas armadas y la policía, también estoy revelando el estado actual de militarización en el país. Después de más de una década de gobierno del Partido de Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) en Turquía, uno difícilmente puede negar el hecho de que el poder de la élite militar sobre el parlamento y la burocracia civil ha sido eliminado. Sin embargo, esto no significa, necesariamente, que podamos ahora

Sigue en página 10...

Lo nuevo en la tienda en-línea de la IRG

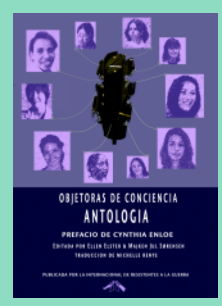
La Internacional de Resistentes a la Guerra ofrece una variedad de productos por medio de su tienda en-línea. Estos y muchos otros libros pueden ser comprados en nuestra página web y algunos incluso están disponibles para ser leídos en-línea o para bajar como PDF.



En su nuevo libro "Antimilitarism: Political and Gender Dynamics of Peace Movements", Cynthia Cockburn presenta estudios de casos de movimientos pacifistas, antiguerra y antimilitaristas en Japón, Corea del Sur, España, Uganda y Reino Unido, de redes internacionales contra a conscripción militar y la proliferación de armas ligeras, y de campañas particulares de respuesta a la agresión contra Palestina.

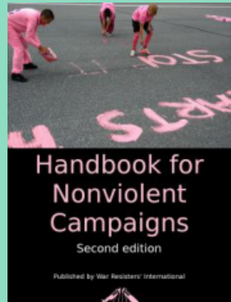
Cynthia Cockburn vive en Londres, donde participa en Mujeres de Negro contra la Guerra, y Liga Internacional de la Mujeres para Paz y Libertad."

Escritora: Cynthia Cockburn
Publicado por Palgrave Macmillan
ISBN: 978-0230359741
Fecha de Publicación: 2012



La objeción de conciencia es vista generalmente como un tema masculino – tal como los soldados. Este libro rompe con esa presunción. Las mujeres se oponen conscientemente al servicio militar y al militarismo. No sólo en los países que reclutan mujeres - como Eritrea e Israel - pero también en países sin conscripción femenina. Al hacer eso, ellas redefinen el antimilitarismo desde una perspectiva feminista, oponiéndose no sólo al militarismo, sino también a una forma de antimilitarismo que pone al objetor de conciencia masculino como el "héroe" de la lucha antimilitarista.
Esta antología incluye contribuciones de mujeres objetoras de conciencia y activistas de Gran Bretaña, Colombia, Eritrea, Israel, Paraguay, Corea del Sur, Turquía, y los E.E.U.U., además de documentos y declaraciones.

Publicado por: War Resisters' International
Editados por Ellen Elster y Majken Jul Sørensen
Prefacio por Cynthia Enloe
ISBN 978-0-903517-22-5. 152 páginas.
Fecha de Publicación: Abril 2010



El cambio social no sucede solo, este es el resultado del trabajo de gente comprometida luchando por un mundo de justicia y paz. Este trabajo se gesta en grupos o celulas de activistas, en discusiones, en sesiones de entrenamientos, en la reflexion de experiencias previas, en la planificación, en la experiencia y aprendizaje con otros. El prepararnos para nuestro trabajo por la justicia social es vital para su éxito. Este ha sido un esfuerzo colectivo de gente trabajando por la noviolencia dentro de la red de la IRG en Australia, Bélgica, Inglaterra, Colombia, Chile, Alemania, Italia, Israel, Corea del Sur, Escandinavia, España, Venezuela, Turaquía y EEUU.

Publicado por la Internacional de Resistentes a la Guerra
ISBN 978-0-973517-23-2
Precio: £6.50 (US$11.13 ; €7.63)

Revisa la tienda en-línea de la IRG en http://wri-irg.org/shop/shop-es-eu.htm

El Fusil Roto

El Fusil Roto es el boletín de la Internacional de Resistentes a la Guerra y es publicado en inglés, castellano, francés y alemán. Esta es la edición 102, de abril 2015. Este número de El Fusil Roto fue producido por Andrew Dey, Hannah Brock y Semih Sapmaz. Nuestro especial agradecimiento a Laura Pollecutt, Betsy Barker, Cesar Padilla, Ali Issa, Tara Tabassi, Maren Mantovani, Henrique Sanchez, Frances Guy, Prasanna Ratnayake and Semih Sapmaz. También muchas gracias al equipo de traducción: Oscar Huenchunao, Lydia Saiz, Yolanda Alvarez, Mabel Pedemonte, Carolina Olivero, Gabriela Calderon, y Mayra Cavilla. Si quieres copias extras de esta edición, por favor contacta la oficina de la IRG o bájalo de nuestra página web.

War Resisters' International,
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
tel +44-20-7278 4040
fax +44-20-7278 0444
info@wri-irg.org

La Internacional de Resistentes a la Guerra apoya y conecta resistentes a la guerra en todo el mundo

Por favor, envía tu donativo hoy para apoyar el trabajo de la IRG !Gracias!

Deseo apoyar a la IRG:
(Marcar al menos una opción)

- ☐ Adjunto un donativo de £/US$/EUR........ a la IRG
  ☐ Por favor enviar un recibo
- ☐ Completé los detalles de mi tarjeta de crédito (hoja adjunta)
- ☐ (Zona Euro únicamente) voy a solicitar una transferencia bancaria mensual/trimestral/anual (por favor marca) a IRG/WRI, Bank of Irland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35 47
- ☐ (Sólo Reino Unido) Voy a solicitar un depósito bancario a la IRG mensual/ trimestral/anual (por favor marcar) número de cuenta: 5072 7388 código bancario: 08-60-01 Banco: Unity Trust Bank, Nine Brindley Place, 4 Oozells Square, Birmingham B1 2HB
- ☐ (Sólo Reino Unido) Adjunto un vale de CAF de £ ....
- ☐ (Sólo en Estados Unidos) Adjunto un cheque a A.J: Muste institute por US$

Dirección

Nombre: ______________________________

Dirección: ______________________________

____

País: ______________________________

Donde mandar el donativo?

Sólo EEUU:
WRI Fund, c/o Ralph di Gla, WRL, 339 Lafayette Street, New York NY 10012
Gran Bretaña y todos los demás:
WRI, 5 Caledonian Road, London N1 9DX

La IRG guarda los nombres y las direcciones de sus miembros en suy base de datos y para su propio uso únicamente. Si usted no está de acuerdo con ésto, por favor comuníquenoslo